

La hoja de ruta del chavismo al poder. Elecciones y propaganda durante la primera fase de la Revolución Bolivariana (1999–2006)

The Roadmap of Chavism to Power. Elections and Propaganda During the First Phase of the Bolivarian Revolution (1999–2006)

*José Alberto Olivar**

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
UNIVERSIDAD METROPOLITANA
CARACAS, VENEZUELA
✉ jolivar@unimet.edu.ve
<https://orcid.org/0000-0003-4747-3414>

RESUMEN

La investigación desarrollará un estudio sobre el proceso político ocurrido en Venezuela luego del triunfo electoral de Hugo Chávez Frías en 1998 y su segunda reelección llevada a cabo en 2006. La hipótesis de este trabajo considera que Venezuela transitó desde 1958 una fase acelerada de su transformación socioeconómica y política, que superó la capacidad de adecuación de la dirigencia de los partidos políticos para establecer nuevos escenarios de representatividad y participación del sistema democrático venezolano. Esta situación favoreció el tránsito hacia un régimen populista-autocrático instaurado a partir de 1999, bajo la denominación inicial de la Revolución Bolivariana. Uno de los aspectos resaltantes de la primera fase de la Revolución Bolivariana fue el auge del gasto público entre 2003 y 2005, orientado en su mayor parte a cubrir el costo de las misiones sociales, cuestión que desestimó la importancia de invertir en infraestructura y ampliar la capacidad de producción del país. Ello obligó al gobierno de Chávez a acelerar la construcción de obras de infraestructura pendientes desde hacía años, para disminuir las críticas de sus opositores políticos. La estrategia electoral en los últimos meses de la campaña electoral de 2006 se orientó a vincular la imagen de Chávez con obras públicas emblemáticas ya terminadas o medianamente concluidas. Los resultados de esta investigación arrojaron que la estrategia de vender la Revolución Bolivariana como un gobierno con hechos materiales permitió estimular en el imaginario colectivo

* Doctorado en Historia. Profesor adscrito al Departamento de Humanidades de la Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela.

la idea de la supuesta eficiencia de Chávez como gobernante y en consecuencia la conveniencia de apoyar su permanencia en el poder.

PALABRAS CLAVE: elecciones, política, conflicto, propaganda, obras públicas, Revolución Bolivariana.

ABSTRACT

The research will develop a study on the political process in Venezuela following the electoral triumph of Hugo Chávez Frías in 1998 and his second re-election in 2006. The hypothesis of this work considers that, since 1958, Venezuela went through an accelerated phase of its socio-economic and political transformation, which exceeded the ability of the leadership of political parties to establish new scenarios of representativeness and participation of the Venezuelan democratic system. This situation favored the transition to a populist-autocratic regime established in 1999, under the initial name of the Bolivarian Revolution. One of the highlights of the first phase of the Bolivarian Revolution was the rise of public spending between 2003 and 2005, aimed mostly at covering the cost of social missions, an issue that dismissed the importance of investing in infrastructure and expanding the country's production capacity. This forced Chávez's government to accelerate the construction of outstanding infrastructure works to reduce criticism from its political opponents. The election strategy in the last months of the 2006 electoral campaign was aimed at linking Chávez's image with iconic public works already or partly completed. The results of this research showed that the strategy of presenting the Bolivarian Revolution as a government with material achievements allowed to stimulate in the collective imagination the idea of Chávez's supposed efficiency as a ruler, and consequently led to the popular support for his tenure in power.

KEYWORDS: elections, politics, conflict, propaganda, public works, Bolivarian Revolution.

Introducción

Desde 1958 Venezuela transitó una fase acelerada de su transformación socioeconómica y política, pero esta superó la capacidad de adaptación y adecuación de la élite que la motorizó, al punto de anquilosarse e impedir la posibilidad de llevar a otro estadio el nivel de representatividad y participación del sistema democrático venezolano. Y lo más palmario de esa postura manifiesta fue haber afinado una serie de modos y prácticas de poder que facilitaron el trabajo de dominación a los redentores de estirpe dictatorial que se hicieron del control del Estado a partir de 1999.

Uslar advirtió (1992, pp. 144–145) que el Estado venezolano fue invadiendo todas las esferas de la vida económica y social, hasta convertirse en un ente hipertrofiado que ponía en riesgo la esfera de los derechos y las acciones de los

individuos. De manera más tajante lo precisó Rangel (1988) cuando señalaba que la responsabilidad de tan funesto escenario era atribuible al liderazgo político del país que tuvo en sus manos la administración de los crecientes ingresos petroleros que, desde 1973, le ofrecieron a Venezuela la posibilidad de dar un salto cualitativo en su proceso de desarrollo. En su opinión: “Algo muy fundamental tienen que haber estado haciendo todos los gobiernos demasiado mal para que ese dinero, administrado por ellos, se nos haya esfumado en malas inversiones, en importaciones superfluas o sustitutivas de una producción nacional potencial, en enriquecimiento de funcionarios y sus testaferros y en fuga de capitales, y encima que el país esté lastrado por una caótica y aplastante deuda pública, interna y externa, su economía se encuentre estancada y tengamos una trágica y peligrosa tasa de desempleo” (Rangel, 1988, p. 133).

De manera que las perspectivas que transparentaba la democracia venezolana hacia mediados de la década de los ochenta no lucían del todo alentadoras. En efecto, Romero (1988, p. 110) expresaba sin lugar a duda que, así como el excesivo intervencionismo estatal conllevaba de manera inconmensurable al ahogo de la libertad económica y la iniciativa individual, este terminaba por destruir la libertad política. Por tanto, las condiciones objetivas para que la sociedad diese un vuelco hacia el autoritarismo quedaban servidas en la mesa, ya sea hacia una falsa alternativa socialista o una salida de tipo militarista.

Hacia 1998, tras cuarenta años de vigencia ininterrumpida de un sistema político democrático representativo, este mostraba serias fisuras en la medida que sus logros institucionales no fueron del todo resguardados frente al efecto erosivo de la ineficiencia, la corrupción, el clientelismo, la imprevisión y el despilfarro.

Según lo sugiere Bisbal (2016), en el último tramo de la década de los noventa del siglo pasado hubo un dramático distanciamiento entre el deber ser y lo que fueron las instituciones, cuestión que obedeció “...al quiebre y vaciado ideológico-doctrinario que no solo sufrieron los partidos políticos del país, sino también las distintas instituciones sociales que hacían y hacen vida en Venezuela. Hubo un quiebre ideológico-institucional de valores que ofrecieron campo fértil para siembra de lo que ocurriría” (p. 50) en el futuro inmediato.

Se trata de lo que Carrera (2016) ha definido como la recurrente tendencia a eclipsar por momentos “la larga marcha de la sociedad venezolana hacia la democracia” (p. 24) en la que producto del descrédito del régimen socio-económico y del sistema político democrático, los sobrevivientes de la izquierda insurreccional y de la autoafirmación política henchida en un segmento de la oficialidad castrense, se valieron de los medios ofrecidos por la democracia que ellos mismos adversaban para capturarla y sustituirla por una nueva dictadura.

Este trabajo se enmarcará en el método deductivo, con un abordaje de lo general a lo particular. Para su desarrollo se emplearon las técnicas y procedimientos específicos de la investigación científica, recurriendo al análisis de documentos oficiales, revistas y periódicos de la época, testimonial publicado, así como de fuentes bibliográficas que ofrecen una visión de conjunto en torno al tema.

La pesquisa abarca aspectos que procuran dilucidar el proceso que llevó al ascenso y consolidación del poder de la Revolución Bolivariana, cuyo máximo exponente fue Hugo Chávez. Para efectos de facilitar la delimitación del tema, solo nos enfocaremos en la primera fase del proceso político venezolano que transcurrió entre 1999 y 2006, por tratarse de un período en el cual se materializó el desplazamiento del anterior liderazgo político, las pugnas por la hegemonía absoluta y los mecanismos de legitimación que a la larga se hicieron recurrentes durante la Revolución Bolivariana.

Los días contados del sistema democrático

Las elecciones presidenciales que llevaron a Hugo Chávez al poder en diciembre de 1998 significaron mucho más que la escogencia de un nuevo presidente de la República. La agudización de la crisis económica convirtió el acto del sufragio en una suerte de plebiscito a favor o en contra del orden político reinante.

La apuesta de los venezolanos en 1998 se decantó mayoritariamente por cualquiera que demostrara no estar vinculado a los partidos políticos tradicionales. Incluso más allá: los venezolanos apostaron por cualquiera que prometiera trascender los partidos políticos y propusiera una alternativa para el funcionamiento de la democracia que prescindiera de estas organizaciones políticas. (Briceño, 1999, pp. 230–231)

De hecho, entre las causas que potenciaron la candidatura de Hugo Chávez Frías en 1998 estuvo el flagelo de la corrupción que imperaba a sus anchas en el país. El ejercicio de la política era vista por unos como una actividad inescrupulosa y delictual. Según las mediciones de opinión pública, instituciones como el Congreso Nacional, los partidos políticos, sindicatos y cualquier otro ente relacionado, eran consideradas antes sin mayor representatividad política.

De modo que la frustración cundió de forma generalizada y la búsqueda de un “vengador” se puso a la orden del día. Las masas antes simpatizantes de los partidos Acción Democrática (Socialdemócrata AD) y Demócrata Cristiano (COPEI) se convirtieron sin resquemor en partidarios del proyecto político de Hugo Chávez, mejor conocidos como “chavistas”. Los pobres sintieron que tenían poco o nada que perder con un triunfo de Chávez y, por el contrario, lo veían como el castigo apropiado para la dirigencia política que había gobernado Venezuela desde 1958. Chávez navegó en la cresta de la ola de la antipolítica y los electores pertenecientes a los estratos más empobrecidos de la población lo percibieron como honesto y abnegado, porque en su aventura golpista se había jugado su carrera y libertad. Tal apreciación lo hizo ver como uno de los suyos, la encarnación del pueblo.

La gran promesa de la Constituyente derivó en la panacea que, de acuerdo con la retórica de Hugo Chávez, permitiría superar la desigualdad social. Los

sectores radicales ligados a la candidatura de Chávez apostaron por la estrategia de incitar al odio de clases, para dividir de esa forma el país en dos frentes irreconciliables: por un lado, la dirigencia política tradicional (AD y COPEI), y por el otro, los portaestandartes del patriotismo y la honestidad (el chavismo).

Así pues, Chávez logró penetrar en la mentalidad colectiva para insuflar el descontento y el revanchismo. Con ello buscaba aglutinar voluntades que hasta entonces parecían disímiles, conquistar la fe y esperanza de los crédulos y así como un gran enjambre, catalizar el voto protesta (Arvelo, 1998, p. 13).

Cuando, en febrero de 1999, Hugo Chávez Frías asume la presidencia de Venezuela, cumpliendo los mecanismos de legitimidad propios de la democracia liberal representativa, que en varias ocasiones desdeñó en los conciliábulos frecuentados desde su época de conspirador militar, ahora en calidad del Primer Magistrado de la Nación, no tuvo inconveniente de amoldarse casi a la perfección a las sugerencias de los aduladores que le tendieron la alfombra roja hacia la casa de gobierno que en el imaginario colectivo tatuado de reminiscencias monárquicas simboliza el status del que manda y es obedecido.

Llevado por sus propios impulsos, en ocasiones aparentaba sentirse sofocado por los convencionalismos de protocolo, tal como solía decir en público, se desprendía del saco y corbata y emprendía giras, ataviado de uniforme militar o de gruesa chaqueta. En este plano recurría a la consabida jerga coloquial que manejaba con naturalidad y astucia porque sabía muy bien que ello le rendía frutos.

Un efecto inmediato de esta estrategia se patentaba cuando Chávez hacía calar en la inteligencia emocional de sus partidarios sus propias ideas, las cuales carecían de un constructo teórico medianamente profundo. Se apoyó en el control de los medios de comunicación audiovisuales dependientes del Estado para proyectar su figura en una versión criolla del “Big Brother”, cuya presencia avasallante lo controlaba todo, sin permitir ningún asomo de disidencia, y mucho menos alguien capaz de hacerle sombra.

Chávez no creía realmente en el debate de ideas, y mucho menos aquellos que llevasen a la expresión de la crítica, aunque fuese en el marco de la lealtad a su liderazgo. Le molestaban de sobremanera los cuestionamientos y reaccionaba con su abrasador tono agresivo a todo signo de independencia de criterio. Cualquier iniciativa al margen del cenáculo palaciego era denostada y tildada de “quinta columna” cuyo supuesto fin era debilitar la revolución. No importaba cuan calificadas podían ser las voces que tuviesen el atrevimiento de plantear ciertas críticas o discusiones en el seno del chavismo, porque casi de inmediato la arremetida era aplastante.

Todo lo anterior llevó primero a inducir y luego imponer una forma de conducta servil en la que las aptitudes y competencias de los individuos quedarían subrogadas al cumplimiento de los objetivos revolucionarios. De modo que los funcionarios públicos no estarían al servicio del Estado, sino al servicio de la revolución y en consecuencia solo los más comprometidos, aquellos

que repitiesen a pies juntillas las consignas del aparato propagandista oficial tendrían mayores oportunidades de escalar y recibir favores en detrimento de los que no lo hicieren y quedaran bajo sospecha.

Una revolución muy ladina

La primera vez que el propio Chávez asomó la posibilidad de conversar con sus adversarios ocurrió con motivo de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999. En aquella ocasión, la polémica giró en torno a las bases que regirían la elección de los diputados constituyentistas, pues estas habían sido formuladas discrecionalmente por el presidente Chávez, sin previa consulta con el resto de los poderes públicos y otros sectores de la vida nacional.

Aquella primera manifestación de ejercicio absolutista del poder concitó la reacción de algunas individualidades que interpusieron catorce recursos de nulidad al decreto que convocaba al referéndum consultivo constituyente, de los cuales uno fue declarado con lugar por la Corte Suprema de Justicia y obligó a la reformulación de las bases comiciales propuestas por el Ejecutivo Nacional.

Chávez aparentó acatar la decisión judicial y aceptó dialogar para recoger la opinión de diversos sectores del país, pero en realidad no fue más que una táctica de repliegue para finalmente imponer su criterio, es decir, establecer un mecanismo de selección de los constituyentistas en la que los partidos AD y COPEI no tuviesen la posibilidad de alcanzar escaños suficientes para controlar los debates y decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente que resultó electa el 25 de julio de 1999 (Rachadel, 2015, p. 116).

Ya instalada la Asamblea Nacional Constituyente el 3 de agosto de 1999, sus integrantes de abrumadora mayoría oficialista, dado el mecanismo adoptado para burlar la representación proporcional de las minorías, aprobaron investir al cuerpo de un poder originario por encima de los poderes constituidos. En consecuencia, sus primeros actos se orientaron a neutralizar el funcionamiento de los Poderes Públicos adversos a los planes hegemónicos de Chávez.

Pronto fueron publicados en Gaceta Oficial sendos decretos que ordenaban la reorganización del Poder Judicial y la regulación de las funciones del Poder Legislativo. Este último suspendía de hecho las actividades del Congreso de la República, cuyos diputados y senadores habían sido electos por voluntad popular el 8 de noviembre de 1998, un mes antes de las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Hugo Chávez.

La idea de un inminente cierre del Congreso comenzó a gravitar en la opinión pública. Frente a la actitud de los representantes del Poder Legislativo de exigir respeto a su investidura, una reunión conciliadora fue llevada a cabo en la sede de la Conferencia Episcopal venezolana, en la que los representantes de la Iglesia católica trataron de actuar como mediadores entre las posturas

encontradas de los constituyentistas y los partidos políticos que hacían vida en el Congreso. Pero todo resultó una farsa, la orden de cierre del Congreso fue dada y grupos violentos del chavismo, apoyados por efectivos militares apostados a los alrededores del recinto parlamentario, la hicieron cumplir.

Otro controvertido escenario para el ensayo de esta controvertida forma de hacer política por parte del chavismo, lo ofreció la crisis político-militar del 11 de abril de 2002. El breve derrocamiento de Chávez y su pronto retorno al poder, producto de las contradicciones y errores de sus adversarios, exacerbó la polarización política en la que se sumergió Venezuela desde 1999.

Chávez, crucifijo en mano, ofreció paz, reflexión y rectificación, pero de nuevo todo se quedó en vanas palabras. La escalada del conflicto político en Venezuela llevó a un grupo de países integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) a promover un mecanismo de facilitación para la negociación y resolución del conflicto entre el gobierno y la oposición venezolana.

Desde el 8 de noviembre de 2002 y hasta el 29 de mayo de 2003, funcionó una Mesa de Negociación y Acuerdos, dirigida por el entonces Secretario General de la OEA, César Gaviria, unos representantes del Centro Carter y el PNUD. En medio de la marcha y contramarcha propia de la agitada dinámica política de esos meses, las partes mantuvieron un mínimo canal de comunicación que, tras arduas y prolongadas sesiones, culminó con la firma de un Acuerdo Final que “consagró el Referendo Revocatorio como la vía idónea para solventar el conflicto venezolano” (Martínez, 2010, p. 80).

Sin embargo, el gobierno fue muy hábil en el manejo de la situación planteada en el marco de la mencionada Mesa de Negociación a los efectos de colocar las cosas a su favor. Veamos:

Desde la firma del acuerdo hasta la realización del referéndum revocatorio presidencial (de mayo 2003 a agosto 2004), los objetivos del gobierno revolucionario fueron: 1) manejar y reducir la presión externa; 2) ganar tiempo para recuperar su popularidad mediante los nuevos programas sociales llamados «misiones»; 3) avanzar en el control de los poderes públicos; todo ello en función de diferir la realización de la consulta electoral hasta el momento en que las condiciones fueran absolutamente propicias (...) A nivel externo, el gobierno venezolano se dedicó a establecer acuerdos y ventajas comerciales con muchos países miembros de la OEA, así como con países que pudieran constituir polos de poder alternativos a Estados Unidos, con la finalidad de ir minando la presión que internacionalmente se ejercía sobre Caracas. (Martínez, 2010, p. 77)

En estas circunstancias, no sin obstáculos, se lleva a cabo el referéndum revocatorio previsto en el ordenamiento constitucional, el 15 de agosto de 2004, con un resultado mayoritario a favor del presidente Chávez, hecho que le permitiera continuar al frente del gobierno.

Tal como se había ensayado en los comicios de 1999 para elegir la Asamblea Nacional Constituyente y luego la relegitimación de poderes ocurrida en el año 2000, en adelante el denominador común en cada elección sería el uso ventajista de todos los recursos disponibles en las instituciones y organismos del Estado controlado por el chavismo, para inclinar la elección a su favor.

El hecho de controlar el aparato decisorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) que rige los procesos comiciales en el país, le permitía actuar sin límites y en ocasiones abiertamente, mediante actos de constreñimiento sobre los electores, la aplicación de normas extemporáneas, incumplimiento de los lapsos legales, manipulación del voto electrónico, restricciones e intimidación a los testigos electorales de los partidos de oposición y una atiborrada propaganda oficial con recursos del Estado que al final de cuentas, le restaba credibilidad y transparencia al acto del sufragio.

En búsqueda de legitimidad

Tras los brutales efectos dejados por los resultados del referéndum revocatorio de agosto de 2004 y las elecciones regionales del 31 de octubre de ese mismo año, en los que el bloque oficialista obtuvo 22 de las 24 gobernaciones y 270 alcaldías de las 335 en disputa el liderazgo opositor quedó muy averiado, al punto que tras un año de aquella debacle no había logrado recuperarse, hecho que de nuevo fue aprovechado por el régimen chavista para sacar ventaja y procurarse una estratégica mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional prevista a elegirse el 4 de diciembre de 2005.

A pocas semanas de los comicios parlamentarios, los principales partidos opositores sin una clara estrategia política decidieron no participar, con lo cual dejaron el camino expedito para que el régimen chavista obtuviese 100% de los escaños, y con ello la potestad constitucional de controlar todas las instancias del Estado, sin contrapeso institucional alguno. Literalmente este escenario de franca concentración de poder en un solo hombre era producto de la abrazadora estrategia de convertir cada elección nacional, en una contienda de carácter plebiscitario a favor o en contra de Hugo Chávez.

El importante avance que significó en la década de los noventa del siglo pasado la apertura hacia la descentralización política, mediante la elección directa de gobernadores y alcaldes municipales, quedó vuelto añicos, cuando Chávez decidió involucrarse personalmente en la selección de los candidatos de su partido, poniendo todo el aparataje y recursos del Estado al servicio, no de la proyección de actores regionales, sino de su propia figura como líder absoluto e infalible de la Revolución Bolivariana que inicialmente se ufana en proclamar.

Resultaba muy común ver, en los actos proselitistas de las campañas de gobernadores, alcaldes y diputados a la Asamblea Nacional, la práctica del pleno respaldo por parte de Chávez hacia el candidato cooptado por la revolución,

es decir, por su voluntad personalísima, indicando a sus seguidores que debían sufragar por tal en señal de obediencia a los dictámenes del líder.

En consecuencia, transcurridos los primeros seis años de gobierno bajo la jefatura Chávez, en el marco de la Constitución aprobada en 1999, éste llegaba a la justa electoral de 2006, habilitado constitucionalmente para aspirar a la reelección, con el camino allanado a los efectos de consolidar el poder puesto en sus manos.

No obstante, este escenario aparentemente imbatible tenía un flanco débil, coadyuvado por el deterioro de los controles legales y frenos institucionales. A medida que Chávez acumulaba más y más poder, los primeros signos de ineficiencia y corrupción generalizada se ponían de manifiesto ante la opinión pública.

Frente a esta arista, la política comunicacional del gobierno acrecentó su margen de maniobra mediante la aprobación, en diciembre de 2004, de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley RESORTE), tendente a controlar la programación de los medios de comunicación –en particular los de carácter privado– a riesgo de ser objeto de sanciones penales y administrativas. Ello se tradujo en la salida del aire de aquellos programas que les resultaban incómodos al poder, el cierre de emisoras de radio y televisión, en fin, todo un entramado de criminalización de los medios que inducía a la autocensura y la complacencia hacia el gobierno (Chirinos, 2016, pp. 134–139).

Pese a la persecución selectiva orquestada contra la dirigencia opositora, aunado a la creciente tendencia de emigrar del país por parte de familias o individualidades profesionales sugestionadas por la incertidumbre política¹ (Freitez, 2011, p. 167), había una brecha ineludible por transitar tanto para oposición como para el gobierno: las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006.

En efecto, el presidente Chávez inició el año clave 2006 con viento a favor. Control total sobre todos los poderes públicos nacionales y regionales. Una oposición desarticulada. Un generoso ingreso petrolero que por tercer año consecutivo impulsaba el crecimiento económico y el consumo en los estratos medios y bajos de la población. Para más señas, los índices de popularidad del presidente rondaban 60 % según las encuestas.

Entretanto, el auge del gasto público, orientado en su mayor parte a cubrir el costo de los programas sociales denominados “Misiones” con ribetes netamente electorales² (D’ Elia, 2007, pp. 524–527), desestimó la importancia

¹ Para el año 2000 la cifra de emigración venezolana ubicada en varios países del continente americano se contabilizaba en 207 mil emigrantes, fenómeno que continuó incrementándose para alcanzar cerca de 464 mil venezolanos, según datos del Banco Mundial para el 2005.

² Las Misiones sociales cumplieron un papel determinante para hacer frente a la convocatoria de un referendo revocatorio en 2004, fungiendo de instancias de beneficencia populista, pero también de organización y control de los adeptos al presidente Chávez. Ello reforzó la condición asistencialista del Estado venezolano que entraña una relación de dependencia de la población más vulnerable para con el Estado, cuestión que termina por debilitar a la democracia, potenciando mecanismos de exclusión y discriminación política.

de invertir en infraestructura y ampliar la capacidad de producción del país. Esto se puso de manifiesto de forma dramática en dos sucesos que atrajeron la atención nacional: el incendio de una de las principales sedes de la administración pública en Caracas, conocida como la Torre Este del Parque Central, el 17 de octubre de 2004, y el derrumbe del Viaducto N° 1 de la principal arteria vial del centro-norte del país, la Autopista Caracas-La Guaira, el 19 de marzo de 2006.

Ambos acontecimientos supusieron que, en medio de la súbita bonanza fiscal, el Estado controlado por Chávez se mostraba ineficiente para atender los problemas estructurales del país. El obsesivo interés del presidente Chávez por centrarse casi de forma exclusiva en hacer frente a sus enemigos internos, unido a su cada vez más creciente ansia de protagonismo internacional, que tuvo en el entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush (2001–2009), su principal foco de atención retórica, hicieron ver las costuras del gobierno de Chávez en materia de inversión en bienes de capital fijo.

En lo que atañe a la caída del Viaducto N° 1, obviamente no se trataba de un percance aislado, ya que la Autopista Caracas-La Guaira es una de las vías más transitadas del país y este suceso amenazaba con tener incidencia en los planes electorales del régimen, dada la dimensión de las secuelas que de hecho trajo consigo.

En primer lugar, la abrupta interrupción del corredor vial entre Caracas y el Litoral Central ocasionó un grave impacto tanto en la economía local como nacional, en virtud de la elevada demanda de bienes y servicios que por ahí fluye. Desde 2003 a fin de garantizar la clientela electoral, elevar el consumo, contener la inflación y aplacar algunos conatos de desabastecimiento, el gobierno incrementó notablemente las importaciones de alimentos y otros enseres. Más de un tercio de los productos importados de consumo masivo nacional, entraba al país por el puerto de La Guaira y el Aeropuerto de Maiquetía (Azpúrua, 2006, p. 144). De hecho, para 2005 el total de importaciones cerró en 8.189 millones de dólares, de los cuales el 36 % ingresó por las aduanas del Litoral Central (Producto, 2005a, p. 40).

En segundo lugar, el caos del viaducto tomó por sorpresa al gobierno y generó fuertes retrasos en la distribución y encarecimiento en los anaqueles. Ello tambaleó la estrategia comunicacional oficialista, puesto que la crisis se le vino encima y su capacidad de respuesta se mostró muy lenta, además de no haber prevenido a tiempo el colapso del viaducto. El presidente Chávez se encontraba muy ocupado en su particular batalla política dentro y fuera del país. Para colmo de males, un mar de contradicciones por parte de los voceros oficiales puso al descubierto la incapacidad gerencial del gobierno.

Mientras que por un lado afirmaban que lo del viaducto no podía haberse previsto, el mismo Chávez admitía que sí estaba al tanto de las fallas estructurales, pero no hubo rapidez en la instrumentación de soluciones definitivas. Por el contrario, los organismos responsables del Estado se dedicaron en prolongar la utilidad de una obra en franco deterioro.

En tercer lugar, se sumaba el caos social generado por la urgencia de desalojar a cerca de dos mil familias residentes en las barriadas aledañas al derruido viaducto, dada la inestabilidad del terreno. Asimismo, las penurias de los pasajeros, usuarios y habitantes que día a día hacen vida entre el Litoral Central y Caracas, los cuales estudian y trabajan en la capital. Frente a esta compleja situación, el gobierno insistía en paliar la situación con subsidios y medidas especiales.

En cuarto lugar, el colapso reveló la falta de interés en el mantenimiento de las vías alternas, pues la carretera Caracas-La Guaira se encontraba en estado deplorable, con muchas fallas de borde, deslizamientos y nula iluminación nocturna. Por si fuese poco, a esta crisis se añadió el hecho de que la carga marítima que llegaba a la aduana del puerto de La Guaira se desviase a otros puertos, cuestión que hizo fluir la circulación hacia Puerto Cabello y Valencia, pero con el efecto desfavorable de estar también las vías que las unen con Caracas, en muy mal estado. De hecho, la Autopista Regional del Centro no estaba preparada para atender el incremento de la demanda vehicular, puesto que otra importante autopista que comunica Caracas con las ciudades de Valencia y Puerto Cabello, ubicadas en el centro del país, también mostraba graves signos de deterioro.

La oposición política muestra signos de recuperación

En medio de la crisis del viaducto, durante el primer semestre de 2006, el ambiente electoral parecía no arrojar mayores signos de vida, ello ante la falta de garantías electorales, supeditado a un Consejo Nacional Electoral carente de legitimidad, cuestión que alimentaba la tendencia abstencionista prevaeciente desde 2004. Los grupos y organizaciones políticas adversos al chavismo no habían logrado unificar criterios en torno a participar o no en los comicios presidenciales previstos para finales de ese año.

Sin embargo, ya en la víspera del inicio oficial de la corta campaña electoral prevista entre septiembre y noviembre, los principales factores de oposición refrendaron su disposición de acudir a la cita electoral con una candidatura unitaria, representada por el entonces gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. A partir de ese momento, la justa comenzó a subir de tono, previéndose muy mediática tanto del lado del gobierno como de la oposición, sobre todo esta última interesada en motivar a los abstencionistas a ejercer su derecho al voto.

De acuerdo con López (2016), uno de los móviles que finalmente empujó la participación de la oposición en aquellas cuestionables elecciones presidenciales, a diferencia de las otras que las precedieron, fue el hecho "...que pese al fortalecimiento político alcanzado por Chávez y su gobierno (...) siguió siendo significativa la resistencia de una porción de la sociedad a las orientaciones políticas y actitudes políticas del gobierno (...) cerca del 40 % de los encuesta-

dos no compartía las propuestas socialistas” (p. 116). En consecuencia, la clave radicaba en capitalizar políticamente ese malestar.

Ante ese giro inesperado, el Comando de Campaña Miranda, que impulsaba la candidatura de Chávez, se propuso mercadear a su máxima expresión el producto que representaba el propio Chávez, y para ello se apoyó en la difusión de su mensaje por medio de la red de emisoras de radio y televisión, periódicos comunitarios, afiches, pancartas, grafitis, volantes, así como el aprovechamiento de los beneficios otorgados por la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión para difundir gratuitamente a través de los organismos estatales, mensajes políticos y propagandísticos a favor del régimen, en medios comerciales.

El gobierno se valió de cualquier cosa a su alcance, como por ejemplo la interpretación en extremo a su conveniencia de las leyes, el peculado de uso, el activismo de diputados, ministros, gobernadores, alcaldes, concejales oficialistas a favor del candidato-presidente. E igual como hizo en la campaña durante el referendo revocatorio, se afianzó en el lazo emocional que concitaba en los estratos de más escasos recursos económicos, las Misiones sociales.

No menos importante resultó la vieja táctica de apelar a la inauguración de obras públicas en actos proselitistas. La crisis del Viaducto N° 1 y el resurgimiento de la oposición política obligó al gobierno a acelerar la construcción de las obras de infraestructura pendientes desde hacía años.

En principio, el Presupuesto Nacional aprobado para 2006, preveía destinar por concepto de gasto público Bs. 87 billones, de los cuales aproximadamente Bs. 132 millardos fueron asignados al Ministerio de Infraestructura para el mantenimiento y construcción de puentes, túneles, autopistas y carreteras. No obstante, la cifra global de gasto público presentó una notable expansión hacia el último semestre del año, en virtud de la práctica de ejecutar créditos adicionales al Presupuesto Nacional, cuyo monto por separado abarcó Bs. 41,2 billones (Transparencia, 2017, s/p).

Aunado a este cuantioso desembolso, el Ejecutivo Nacional había instituido desde 2004 una suerte de presupuesto paralelo, financiado por la industria petrolera y administrado discrecionalmente sin controles fiscalizadores de ningún tipo. El Fondo para el Desarrollo del País (FONDESPA), luego denominado Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), manejó recursos por el orden de los 4.229 millones de dólares entre 2004 y 2006, para la puesta en marcha de proyectos especiales y de inversión en la infraestructura física, además del sostenimiento de las misiones sociales (Oliveros y Rodríguez, 2017, p. 187).

Tales aportes presupuestarios estaban en perfecta consonancia con el propósito hegemónico del gobierno, el cual incluía una presencia avasallante de la figura del presidente Chávez en el ámbito publicitario, sobre todo a partir de 2004, durante y después del referendo revocatorio. En 2003, la inversión publicitaria de las instituciones y demás organismos gubernamentales se ubicó al nivel de Bs. 132 millardos. La cifra registra un incremento exponencial de Bs. 170 millardos al año siguiente dados los cruciales comicios celebrados en

medio de la crispación de la polarización política. Para 2005 el gasto en publicidad oficial desciende levemente a Bs. 153,2 millardos, pero no por ello el gobierno dejó de imprimirle su sello hegemónico por intermedio de las alcaldías y gobernaciones que quedaron en manos del oficialismo en las elecciones regionales (Guzmán, 2006, s/p).

En 2006, el repunte vino aparejado al cúmulo de desafíos que estaban en juego. Fue tal la erogación oficial destinada a fines publicitarios que, al cierre el año, quedó ubicado en el tercer lugar del ranking de los mayores anunciantes del país, gracias a la inversión de 238,1 millones³ de dólares americanos (Producto, 2005b, p. 120).

Durante la campaña presidencial, el papel del presidente quedó mimetizado con la del candidato y sus actos proselitistas. Chávez se exhibió al máximo, aprovechando que por ley los canales privados tenían la obligación de transmitir espacios gratis para promover la gestión oficial. En uno de los mensajes electorales aparecía Chávez pidiendo más tiempo para gobernar, además algunos testimonios sobre la supuesta prosperidad económica habida durante su primera gestión.

También se recurrió a la propaganda denominada por algunos especialistas como “propaganda negra”, que hacía ver que había venezolanos negados a reconocer la obra del gobierno y amenazaba empleando un juego de palabras que aludía al lema del comando opositor: ¡si se atreven se arrepentirán!

Esta maniobra revelaba la efectividad de la estrategia unificadora que en poco tiempo cosechó la oposición política, cerrando, según las encuestas de opinión, la amplia ventaja que desde el principio le llevaba el candidato Chávez. En consecuencia, todo parecía indicar que la meta autoimpuesta por el comando de campaña chavista de alcanzar 10 millones de votos a favor del candidato-presidente se tornaba inverosímil.

Chávez, confiado en la perpetuidad de la disgregación de sus adversarios, dedicó buena parte de su tiempo a emprender una ambiciosa campaña en predios diplomáticos a favor de Venezuela para la obtención de un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

A medida que la apuesta le fue resultado cuesta arriba y ante el crecimiento de la opción de los posibles votantes que no mostraban preferencia por ningún candidato, Chávez retomó el hilo de la campaña por su reelección presidencial a fin de contrarrestar el mensaje del candidato opositor que, mediante intensos recorridos en barriadas y caseríos, amén de una oferta populista que prometía repartir más y mejor la riqueza petrolera, parecía convertirse en una amenaza para su proyecto continuista.

... ambos candidatos decidieron establecer una disputa por el electorado clave: los estratos D y E, que representan más del 80 % de la población con

³ En 2005, se ubicó en el séptimo lugar en el ranking de anunciantes con una inversión de 87,8 millones de dólares americanos.

derecho a voto e inscrita en el Registro Electoral Permanente (REP). La lucha se adelantó a través de las diversas propagandas políticas desplegadas en los medios de comunicación social. Fueron meses de constante actividad y movilidad por parte de ambos candidatos, en su búsqueda de las preferencias del electorado y de un gasto inmenso en publicidad electoral, buscando llegar a todos los sectores claves. (Romero, 2007, s/p)

En las últimas semanas de la campaña, se hizo hincapié en inauguraciones, cadenas, carrozas, mucho dinero en la calle mediante adelanto de una parte de los aguinaldos navideños para empleados públicos en el mes de octubre. En efecto, el 15 de octubre de 2006, el candidato-presidente, cortó la cinta inaugural del Ferrocarril Caracas-Tuy Medio, haciendo hincapié que luego de tres décadas de espera a que los gobiernos anteriores se propusieran a construir un sistema de transporte masivo que mejore la calidad de vida de los habitantes de la región de los Valles del Tuy y zonas aledañas, gracias a la voluntad del gobierno del presidente Hugo Chávez, la obra es una realidad. Y no conforme con ello, el mismo presidente de la República, anunció que quienes viajen en el recién inaugurado ferrocarril lo harían de manera gratuita, hasta el 31 de diciembre de 2006.

En esa misma tónica, operó la inauguración, el 3 de noviembre de 2006, del Metro de Los Teques con un recorrido de 9,4 kilómetros entre la estación Las Adjuntas y la estación El Tambor, en el estado Miranda, luego, el 18 de noviembre de 2006, del primer tramo del Metro de Valencia y, el 25 de noviembre, de un corto trayecto del sistema Metro de Maracaibo.

Sin embargo, el evento que captó mayor impacto propagandístico, lo representó la puesta en servicio del Segundo Puente sobre el Río Orinoco o Puente Orinoquia, acto para el cual fue invitado el entonces presidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula Da Silva, como muestra de la estrecha alianza política y económica conformada entre Venezuela y el gigante amazónico, gracias a la coincidencia ideológica y los cuantiosos negocios acaparados por la constructora brasileña ODEBRECHT.

Sobre esto último, cabe hacer una digresión. En 2005, cuando el presidente Chávez anunció en el marco de las elecciones municipales que se disponía a llevar adelante varios megaproyectos que incluían la línea 5 del Metro de Caracas, la línea 2 del Metro de Los Teques, un segundo puente sobre el Lago de Maracaibo, el tercer puente sobre el río Orinoco y el Metro Caracas-Guarenas-Guatire, estas obras fueron asignadas de forma directa, sin licitación, a ODEBRECHT. Empero, tras este hecho irregular, convergía un entramado de irregularidades que abarcaba pago de comisiones, sobrepagos, cobros en dólares a tasas preferenciales, entre otros ilícitos (Tablante y Tarre, 2015, pp. 193–194).

Volviendo al puente Orinoquia, la obra resaltaba por la majestuosidad e imponente estructura, hecho que fue explotado al máximo por los medios oficiales, como una muestra palpable de la gestión eficiente de la re-

volución. Columnistas oficiosos desglosaron por diferentes medios que, en general, tales inauguraciones ponían de relieve que el gobierno de Chávez era más eficaz que los gobiernos de la Cuarta República, pues “Hoy, el Puente Orinoquia rompe todos los esquemas, como lo hacen las misiones desde el punto de vista social. La revolución demuestra ser eficiente” (Medina, 2006, s/p).

Todos estos actos de proselitismo político en víspera de la elección presidencial contaron con la resonante movilización de simpatizantes a las concentraciones que acostumbraba a poner en marcha el aparataje partido-gobierno, el cual disponía de dinero oficial a manos llenas. Así pues, la omnipotente presencia de Chávez fue desplegada en todos los rincones del país, a los efectos de convertir a Chávez en una marca.

La idea era vincular la imagen de Chávez con obras públicas emblemáticas ya terminadas, como parte de la estrategia de vender la revolución como un gobierno con hechos materiales. De manera que se inculcaba en el imaginario colectivo un mensaje contundente en cuanto a la eficiencia de Chávez como gobernante y ejemplo de éxito que, en consecuencia, debía traducirse en continuidad para garantizar la conclusión definitiva de varias de esas obras inauguradas a medias, y la ejecución de ambiciosos nuevos proyectos de infraestructura.

Llegado el día de los comicios y en medio de denuncias de ventajismo y parcialidad por parte del CNE, las elecciones arrojaron un nuevo resultado favorable a Hugo Chávez con el 64,84 % de los votos emitidos, seguido de Manuel Rosales quien obtuvo el 36,9 % de los sufragios.

Conclusiones

En 1999, el liderazgo político-militar que asumió la conducción del hipertrofiado Estado venezolano aprovechó la acentuada flaqueza del sistema político instaurado en 1958 para poner en marcha un proyecto hegemónico que con el tiempo desnaturalizó los preceptos de la democracia liberal, de manera particular uno de sus principales rasgos distintivos: el ejercicio del derecho al voto. Avanzando de forma arrolladora hacia el control absoluto no solo del Estado, sino de la sociedad venezolana.

El ascenso al solio presidencial del teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías vino a representar el quiebre de un prolongado proceso de modernización que terminó por superar la capacidad de adaptación de la dirigencia de los partidos políticos AD y COPEI a cuyo cargo estuvo la responsabilidad de dirigir su fase más preponderante desde 1958.

A medida que la confrontación política fue escalando, Hugo Chávez centró su agenda en arrollar a sus adversarios, aplicando en paralelo una heterodoxa política económica que mantuviese a flote las cuentas públicas asediadas por la fragilidad del mercado petrolero. Esto último explica cómo, durante el lapso 1999–2003, prevalecieron de una u otra forma mecanismos restrictivos

en materia monetaria, cambiaria y fiscal que tuvieron incidencia en el manejo del presupuesto nacional, el cual fue objeto de reducción en algunas de sus partidas, sobre todo en aquellos rubros que implicaban abultadas erogaciones fiscales.

Este escenario sufrió un brusco giro a partir de la recuperación de los precios del petróleo a finales de 2003, y sobre todo en 2004, que coincidió con el fallo de los más contundentes intentos por desplazar a Chávez del poder, el cual acopió a su favor mediante una política expansiva del gasto público, acompañada de la exacerbación del populismo y el clientelismo que en tan solo dos años (2004–2005) le permitió concentrar en sus manos todo el poder del Estado, desmoralizando a sus opositores.

Sin embargo, el foco estuvo centrado en las misiones sociales que permitían armar un modelo de mayor control político sobre sus adeptos, y en menor medida en la inversión en obras de infraestructura que el país ameritaba desde hacía varios años. Cuestión que además de contribuir al deterioro de bienes y servicios públicos, ya sea por la saturación de su capacidad de atención a las demandas de la población o por la falta de continuidad de proyectos ya iniciados, representó un flanco débil en la estrategia de dominación oficialista, pues comenzó a ponerse en evidencia la escasa eficiencia del gobierno para resolver de forma estructural los graves problemas del país.

Razones para este cuestionamiento no resultaban baladíes, pues luego de 2004, Chávez contaba con una creciente renta petrolera controlada a su libre arbitrio, instituciones del Estado desde alcaldías, gobernaciones, poderes públicos nacionales, ministerios, entre otros, todos ocupados por sus partidarios, en fin, sin excusa para proceder a ocuparse de afianzar no solo un proyecto político, sino un modelo de desarrollo socioeconómico verdaderamente sustentable.

Llegado el año 2006, la oposición política comenzó a recuperarse de forma paulatina y la oferta de un mejor país, más allá de políticas populistas e inversiones de dudosa efectividad productiva, no terminaba de enraizarse de forma racional y consensuada. Amén de potenciar el alcance de las misiones sociales, se recurrió al expediente de inaugurar obras públicas para ofrecerle al candidato-presidente un piso de legitimidad en cuanto a su capacidad de administrar eficientemente los recursos públicos, además de la promesa de completar ambiciosos proyectos si la Revolución Bolivariana continuaba en el poder. En esto, el chavismo no se diferenció de sus otrora adversarios políticos (AD y COPEI) que en su hora ligaban la obra de sus respectivos gobiernos a la suerte electoral del partido político durante las elecciones nacionales efectuadas al amparo de la Constitución de 1961. Chávez llegó al poder en 1999 con el discurso de eliminar de raíz viejas prácticas y corruptelas que atribuyó con vilipendio a los partidos del *estatus quo*, pero ya consolidado, no hizo más que llevar a otro nivel mecanismos clientelares y de sujeción autoritaria que prevalecieron en pasado reciente.

Referencias bibliográficas

La hoja de ruta del chavismo al poder. Elecciones y propaganda durante la primera fase de la Revolución Bolivariana (1999–2006)

José Alberto Olivares

- “Anunciantes desbocados”, *Producto*, no. 282, pp. 118–124.
- Arvelo R. A. (1998). *El dilema del chavismo. Una incógnita en el poder. Ensayos para personas que detestan a los políticos*. Caracas: El Centauro Ediciones.
- Azpúrua, A. E. (2006). *La Caracas-La Guaria. Del esplendor a la debacle. Crónicas, reportajes y testimonios de la autopista Caracas-La Guaira*. Caracas: Los Libros de El Nacional.
- Bisbal, M. (2016). Un nuevo régimen comunicativo. Política, poder y comunicaciones. En M. Bisbal, (Ed.), *La comunicación bajo asedio. Balance de 17 años* (pp. 49–67). Caracas: Konrad Adenauer Stiftung/UCAB.
- Briceño, H. (2017). Sistema de partidos venezolano: polarización y crisis de representación. En D. B. Urbaneja (Ed.), *Desarmando el modelo. Las transformaciones del sistema político venezolano desde 1999* (225–258). Caracas: Instituto de Estudios Parlamentarios Fermin Toro – Abediciones – Konrad Adenauer Stiftung.
- Carrera, G. (2016). *Continuidad y ruptura en la Historia contemporánea de Venezuela*. Caracas: Fundación Rómulo Betancourt.
- Chirinos, M. (2016). Hitos comunicaciones del período revolucionario (1999–2012). En M. Bisbal, (Ed.), *La comunicación bajo asedio. Balance de 17 años* (pp. 133–155). Caracas: Konrad Adenauer Stiftung/UCAB.
- D’Elia, Y. (2007). Funciones del gasto público en Venezuela. *SIC*, no. 700, pp. 524–527.
- Freitez, A. (2011). Modernización de las pautas reproductivas a lo largo del siglo XX. En A. Freitez, (Ed.), *La población venezolana 200 años después* (pp. 288–318). Caracas: Universidad Católica Andrés Bello/Asociación Venezolana de Estudios de Población.
- Guzmán, C. E. (2006). La industria creativa de la publicidad en Venezuela 2002–2006. Recuperado el 6 de abril de 2020, de <https://es.slideshare.net/Innovarium/carlos-enrique-guzmn-crdenas-ind-creativa-publicitaria-vzla-1996-2006>
- Ley del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2006. *Transparencia.org*. Recuperado el 8 de abril de 2020, de <https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/02/02-Ley-de-Presupuesto-2006.pdf>
- López, M. (2016). *El ocaso del chavismo. Venezuela 2005–2015*. Caracas: Editorial Alfa.
- Martínez, M. A. (2010). La Mesa de Negociación y Acuerdos (2002–2003) y el proceso de facilitación de la OEA y el Centro Carter. *Politeia*, vol.33, no. 44, pp. 47–88.
- Medina, D. (13 de noviembre de 2006). Con el puente Orinoquia la revolución demuestra ser eficiente. *Aporrea*. Recuperado el 6 de abril de 2020 de <https://www.aporrea.org/oposicion/a27147.html>
- Negocios sin puente. (2005). *Producto*, no. 267, pp. 38–45.
- Oliveros, L., y Rodríguez, J. M. (2017). ¿Qué hacer con el ingreso petrolero? En F. Spiritto, (Ed.), *La nueva economía venezolana. Propuestas ante el colapso del socialismo rentista* (pp. 176–195). Caracas: editorial ALFA.
- Rachadell, M. (2015). *Evolución del Estado venezolano 1958–2015 de la conciliación de intereses al populismo autoritario*. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, Colección Estudios Jurídicos, no. 11.
- Rangel, C. (1988). *Marx y los socialismos reales y otros ensayos*. Caracas: Monte Ávila Editores.

Dossier
América Latina:
Venezuela

Romero, A. (1988). *La miseria del populismo. Mitos y realidades de la democracia en Venezuela*. Caracas: Editorial Panapo.

Romero, J. E. (abril 2007). Las elecciones presidenciales en Venezuela 2006. Perspectivas políticas e implicaciones para América Latina y para la situación socio-política de Venezuela. *Nuevo mundo, mundos nuevos*. Recuperado el 06 de abril septiembre de 2020, de <http://journals.openedition.org/nuevomundo/3900>

Tablante, C. y Tarre, M. (2015). *El gran saqueo. ¿Quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos?* Caracas: La Hoja del Norte.

Uslar Pietri, A. (1992). *Golpe y Estado en Venezuela*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.